

**TRIBUNAL CALIFICADOR DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO  
SUPERIOR DE LETRADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS**

**CUARTO EJERCICIO**

Con fecha 15 de enero de 2017 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal de Cuentas escrito de la Letrada Doña Carolina R.C. en que, actuando en nombre y representación de Don Tomás M.B., ex concejal del Ayuntamiento de N., manifestó ejercitar ante el Tribunal de Cuentas acción pública de responsabilidad contable.

En el mencionado escrito, que venía acompañado de poder notarial bastante a favor de la Letrada y de diversos documentos en apoyo de los hechos que en él se denunciaban, se manifestaba:

“Doña Carolina R.C., Letrada con Nº de colegiación ..., actuando en nombre y representación de Don Tomas M.B., ex concejal del Ayuntamiento de N., formula a través del presente escrito acción pública de responsabilidad contable con fundamento en el artículo 47.3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, por los hechos que a continuación se exponen:

- 1) Con fecha 12 de enero de 2013, el Ayuntamiento de N. ha dejado de ingresar una cantidad de 340.000 euros como consecuencia de la prescripción del derecho a cobrar tributos municipales cuya gestión y recaudación estaba encomendada a Don M., el cual había sido contratado por la entidad como agente colaborador para la gestión y recaudación de los ingresos municipales.

Ello supone un menoscabo en los fondos públicos de la entidad constitutivo de alcance por valor de la mencionada cantidad, cuya responsabilidad contable directa corresponde a Don M.

- 2) Con fecha 15 de marzo de 2015, los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la provincia, por Sentencia 31/2015, declararon la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de N. por daños ocasionados en la cubierta de un local comercial propiedad de Don L.S. los cuales se habían producido como consecuencia de un derrumbamiento de instalaciones municipales colindantes mal conservadas. En la sentencia mencionada se reconoció la obligación del Ayuntamiento de indemnizar a Don L.S. con una cantidad de 4.000 euros en concepto de resarcimiento de los daños producidos, los cuales fueron abonados al mismo, por orden de pago del Alcalde, el 21 de marzo del mismo año.

Ello supone un menoscabo en los fondos públicos municipales constitutivo de alcance por valor de 4.000 euros, cuya responsabilidad contable directa ha de corresponder al Alcalde de la corporación, que por su negligencia permitió el deterioro y derrumbamiento de las mencionadas instalaciones municipales y que ordenó el pago de la indemnización para el resarcimiento de los daños ocasionados.

- 3) Con fecha 9 de enero de 2012 el Ayuntamiento de N. celebró el último ejercicio de un proceso selectivo, por sistema de oposición, para cubrir dos plazas de funcionario de categoría C1 en la Corporación.

Como consecuencia de la superación de las mencionadas pruebas, resultaron seleccionados Don R. D. y Doña S. F. los cuales tomaron posesión el día 23 de marzo de 2012 y desde entonces han desempeñado las funciones propias del cargo y percibido las retribuciones correspondientes a la mencionada categoría C1, las cuales ascienden a un total de 234.560 euros.

Ha quedado acreditado, sin embargo, que Don R. D. y Doña S. F. no estaban en posesión del título de bachiller o técnico exigible para el acceso a la mencionada categoría C1 por lo que el importe de las retribuciones que les han sido abonadas ha producido un menoscabo en los fondos públicos de la corporación constitutivo de alcance cuya responsabilidad contable debe corresponder al Alcalde como ordenador de los mencionados pagos.

- 4) En fecha 12 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento de N. celebró dos contratos menores con la mercantil Office S.A. por importe de 10.000 euros cada uno para el suministro de material de oficina al Ayuntamiento, habiéndose recibido el material el 23 de noviembre de 2014.

La celebración de estos contratos constituyó un fraccionamiento contractual ilegal realizado con el fin de eludir los requerimientos de publicidad y concurrencia exigidos por las normas de contratación del sector público, lo cual que ha dado lugar a una salida de fondos públicos prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y suponiendo un alcance de los caudales de la corporación por importe de 20.000 euros.

La responsabilidad contable directa ha de atribuirse al Alcalde que ordenó el pago, debiendo atribuirse responsabilidad contable subsidiaria al Secretario Interventor municipal, Don A.M., que no opuso reparo alguno al mismo y al Tesorero municipal, Don B.L., que ejecutó la orden recibida.

- 5) El Ayuntamiento de N., por medio de resolución del Alcalde de 20 de enero de 2015, concedió, en régimen de concurrencia competitiva, a la sociedad anónima "Sports s.a.", una subvención de 4.500 euros para la organización de un curso de alto rendimiento para jóvenes talentos de la localidad los primeros 10 días de septiembre.

Las bases reguladoras de la subvención establecían en sus puntos 2, 3 y 4:

"2. El curso deberá ser impartido por tres deportistas de alto nivel que hayan participado en competiciones internacionales o disfrutado de una beca ADO, seleccionados por la entidad beneficiaria, los cuales serán retribuidos por medio de la subvención por importe de 50 euros la hora. El curso tendrá una duración de 30 horas.

3. Podrán ofertarse como máximo 30 plazas de alumno para el curso.

4. La entidad beneficiaria podrá fijar el precio de la matrícula que deberá abonar cada alumno para obtener una plaza en el curso el cual no podrá ser superior a 100 euros por alumno".

El Alcalde ordenó el pago de la subvención el 20 de febrero de 2015.

Un total de 30 alumnos se matricularon en el curso. El precio fijado para la matrícula fue de 100 euros por alumno.

Si bien el curso constaba de 30 horas, únicamente fueron impartidas 10 de ellas y los monitores seleccionados por la sociedad "Sports s.a." no contaban con la titulación señalada en la base 2 que además fue la anunciada en la publicidad del curso.

Como consecuencia de ello, los 30 alumnos interpusieron una demanda colectiva contra "Sports s.a." en que se condenó en sentencia firme (sentencia 1123/2016) a la sociedad a la devolución del importe de la matrícula del curso a cada uno de los alumnos (3.000 € en total).

Como consecuencia de los hechos enunciados se produjo un alcance en los fondos públicos de la corporación por importe de 4.500 euros, cuya responsabilidad contable directa corresponde a la empresa "Sports S.A.".

- 6) El Ayuntamiento de N. celebró un contrato administrativo de concesión de obra pública para la construcción del centro cultural en el barrio de C.M. con la empresa C.C. S.A. el 1 de abril de 2010. Destacan las siguientes cláusulas:

- El precio del contrato se fijó en 1.100.000 euros que se pagaría tanto con aportaciones dinerarias como no dinerarias.
- La construcción del centro debía finalizar antes del 1 de abril del 2011.
- Una vez finalizada la construcción debía permitirse al Ayuntamiento el uso del centro cultural de manera gratuita, sin coste alguno para el Ayuntamiento, un máximo de cinco días al año. En lo que se excediera de estos cinco días, el Ayuntamiento debería abonar a la empresa C.C. S.A. un importe de 1.000 euros por día en concepto de alquiler

La construcción finalizó el 1 de abril de 2012, habiéndose producido sobrecostes debidos a actos de vandalismo en el transcurso de la construcción por importe de 100.000 euros, los cuales fueron abonados, por orden del Alcalde, el 15 de abril de 2012 en que se recibió el último certificado de obra.

En el año 2013, el Ayuntamiento hizo uso del centro cultural durante un total de seis días, abonando, por orden del Alcalde, a la empresa C.C. S.A., conforme a las facturas emitidas por esta, un importe de 6.000 euros. En el 2014, hizo uso del centro cultural cuatro días, abonando, por orden del Alcalde, a la empresa un importe de 4.000 euros y en 2015 hizo uso del centro cultural 10 días, abonando, igualmente, por orden del Alcalde, a la empresa, un importe de 10.000 euros.

Todo ello ha producido un menoscabo constitutivo de alcance en los fondos públicos de la corporación por importe de 120.000 euros (100.000 euros procedentes de los sobrecostes de las obras, y 20.000 euros procedentes del pago del alquiler), cuya responsabilidad contable directa debe atribuirse al Alcalde ordenador de los pagos.

- 7) En relación con el supuesto anterior, en los años 2011 y 2012 el Ayuntamiento de N. concedió, a la empresa C.C. S.A., dos subvenciones para que ésta organizara un cine de verano en el centro cultural durante el mes de agosto de cada año.
- Subvención del año 2011: se concedió por resolución del Alcalde de 10 de enero de ese año, por importe de 10.000 euros, el cual ordenó el pago el 31 de enero. En las

bases reguladoras se fijó el día 30 de noviembre del mismo año como fecha límite para que la entidad beneficiaria justificara la subvención. El cine de verano finalmente no pudo organizarse ese año pues las obras del centro cultural no habían terminado. Sin embargo, el Ayuntamiento no inició procedimiento alguno para obtener el reintegro de la subvención a pesar de que el Interventor puso de manifiesto la necesidad de reclamar el importe de la misma mediante Informe de 5 de mayo de 2012.

- Subvención del año 2012: se concedió por resolución del Alcalde de 15 de abril de ese año, por importe de 10.000 euros, el cual ordenó el pago el 15 de mayo. En las bases reguladoras se fijó el día 30 de noviembre del mismo año como fecha límite para que la entidad beneficiaria justificara la subvención. Si bien ese año la empresa C.C. S.A. organizó el cine de verano en el mes de agosto según lo estipulado, el 30 de noviembre no había presentado documentación justificativa alguna al respecto.

Ello ha producido un alcance en los fondos públicos de la corporación por importe de 20.000 euros, cuya responsabilidad contable directa debe atribuirse a la empresa C.C. S.A. por dicho importe así como al Alcalde ordenador de ambos pagos.

- 8) El 11 de marzo de 2013 el Ayuntamiento de N. procedió a la compra, por un importe de 180.000 euros, de un garaje dotado con 30 plazas para su utilización por los vecinos del municipio. Sin embargo, el municipio ya contaba con un aparcamiento municipal que tenía 50 plazas desocupadas, el cual satisfacía sobradamente las necesidades de aparcamiento de los vecinos de la localidad, siendo la adquisición del nuevo local innecesaria y suponiendo un gasto que no debió asumir la corporación.

Ello supone un menoscabo en los fondos públicos de la entidad local constitutivo de alcance por importe de 180.000 euros cuya responsabilidad corresponde al Alcalde como ordenador del pago.”

A la vista de los hechos expuestos y de los razonamientos jurídicos manifestados en este escrito, se solicita de los órganos competentes de la Jurisdicción contable:

a) Que se admita a trámite la presente acción pública de responsabilidad contable y, como consecuencia de ello, se incoe el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance.

b) Que una vez desarrollado el citado procedimiento con arreglo a los trámites

legalmente previstos para el mismo, se dicte Sentencia en la que se declare la existencia de un alcance en los fondos públicos del Ayuntamiento de N. de 923.060 euros de principal.

c) Que se condene como responsables contables directos y como responsables contables subsidiarios de dicho alcance a las personas físicas y jurídicas que se establecen en la presente acción pública que deberán reintegrar a las arcas públicas municipales el principal y los intereses públicos correspondientes a la parte concreta del alcance que les resulte imputable. “

La acción pública presentada por la Letrada Doña Carolina R.C. actuando en nombre y representación de Don Tomás M.B., fue asignada al Consejero de Cuentas de la Sección del Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a quien correspondía según el turno establecido.

El citado Consejero de Cuentas, realizadas las actuaciones previstas en el artículo 56.2 de la Ley 7/1988 de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dictó Auto con fecha 22 de junio de 2017 admitiendo la acción pública a trámite y proponiendo el nombramiento de Delegado Instructor para la práctica de las actuaciones previstas en el artículo 47 de la misma ley.

Este Auto fue notificado a la representación procesal de Don Tomás M.B, así como al Ayuntamiento de N. y al Ministerio Fiscal.

La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas designó, por resolución de fecha 15 de julio de 2017, Delegada Instructora para la práctica de las actuaciones previas previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La Delegada Instructora realizó las diligencias oportunas y practicó la Liquidación Provisional en fecha 22 de noviembre de 2017. Respecto de los hechos que consideró presuntamente constitutivos de responsabilidad contable dictó Providencia en esa misma fecha por la que se requirió a los presuntos responsables para que reintegraran, depositaran o afianzaran el importe del presunto alcance, con apercibimiento de que en caso de no atender al mencionado requerimiento, se procedería al embargo de sus bienes, conforme al artículo 47.1 letra f) de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Frente al Acta de Liquidación Provisional y la mencionada Providencia de requerimiento dictadas por la Delegada Instructora, la representación procesal del Alcalde de la Corporación interpuso, en el plazo de 5 días, recurso del artículo 48.1. de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por el que se solicitaba la revocación de las resoluciones impugnadas así como la suspensión del requerimiento de pago, deposito o afianzamiento en tanto no se resolviera el recurso interpuesto. Algunas de las alegaciones realizadas en el recurso fueron:

- Indefensión de su representado por haberse producido la caducidad del trámite de las Actuaciones Previas pues la práctica de las diligencias ha excedido el plazo de dos meses previsto en el artículo 47.4 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- Ausencia de responsabilidad contable del recurrente pues éste no ha percibido cantidad alguna de los fondos públicos aquí cuestionados.

Una vez concluidas las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y resuelto el recurso formulado contra la Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago, deposito o afianzamiento, se pasaron las actuaciones al Consejero de Cuentas para la tramitación del procedimiento de reintegro por alcance correspondiente.

La representación procesal del actor público formuló escrito de demanda sobre la base de los mismos hechos y contra las mismas personas que aparecían en su escrito de acción pública.

El Consejero de Cuentas fijó la cuantía del procedimiento en 923.060 euros.

Admitida la demanda y trasladada a los demandados, éstos presentaron escritos de contestación a la demanda en el plazo legalmente estipulado. Algunas de las alegaciones formuladas fueron las siguientes:

Alegaciones formuladas por el Alcalde:

- Respecto al supuesto numero 6), alegó la falta de jurisdicción del Tribunal de Cuentas que debía abstenerse de conocer de los hechos en favor de la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuyos tribunales debían ser los únicos competentes para conocer de las posibles irregularidades producidas en la ejecución del contrato de concesión de obra celebrado.
- Respecto al supuesto numero 4), alegó prejudicialidad penal, debiendo suspender el Consejero de Cuentas el procedimiento hasta que no se dictase resolución que pusiera fin a las Diligencias Previas 45/2014 abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de la Provincia, como consecuencia de un posible delito de prevaricación en la adjudicación de los contratos menores. *(Ha quedado probada la existencia de dichas Diligencias Previas).*
- Respecto al supuesto 6), alegó la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario con la sociedad C.C. S.A., que debió ser traído al proceso como demandado junto con el Alcalde.
- Respecto al supuesto 7), alegó prescripción de la responsabilidad contable derivada de la subvención concedida en 2011 por importe de 10.000 euros.

Alegaciones formuladas por la sociedad "Sports S.A."

- Respecto al supuesto 5), alegó excepción de cosa juzgada, pues la Sentencia 1123/2016 ya obligó a la sociedad a devolver a los alumnos el importe íntegro abonado por aquellos en concepto de matrícula.

*A la vista de los hechos descritos se solicita del opositor:*

- a) Que indique, argumentándolo jurídicamente, qué supuestos de los enunciados en la acción pública podrían ser constitutivos de responsabilidad contable especificando en este caso si se trataría de hechos supuestamente motivadores de alcance o de malversación o bien de hechos que pudieran dar lugar a otro tipo de responsabilidad contable y cuales no, en qué cuantía y a quién habría de atribuirse la responsabilidad contable.*
- b) Que elabore un borrador de resolución del recurso del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas interpuesto por la representación procesal del Alcalde, estimando o desestimando las pretensiones del recurrente sobre la base de los motivos alegados.*
- c) Que indique, razonándolo jurídicamente, si procedería estimar o desestimar las alegaciones formuladas tanto por el Alcalde como por la sociedad "Sports S.A." en sus escritos de contestación a la demanda.*